

Quiero agradecerles su presencia en este acto que conmemora el nacimiento de EL MUNDO de Cataluña en aquel turbulento 1995 en que nuestro periódico cumplió un papel tan determinante para la regeneración y la consolidación de la democracia en España. Los quince años transcurridos no sólo acreditan la continuidad de nuestro proyecto sino su arraigo en una sociedad catalana en la que servimos de voz a esa importante minoría que no sólo se identifica de palabra con los valores constitucionales sino que es beligerante en su defensa frente a los mitos identitarios de un nacionalismo que intenta impregnar todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Este acto sirve así de homenaje a los grandes periodistas catalanes que como Xavier Domingo, Jose María Sirvent, Albert Montagut y muy especialmente nuestro actual director Alex Salmon han demostrado hasta qué punto esta disposición a anteponer los principios universales de la democracia a los particularismos que los limitan emana de forma natural del corazón mismo de Cataluña. Y hasta qué punto, en consonancia, la intensidad de su genuino catalanismo cosmopolita ha venido influyendo y enriqueciendo el proyecto plural de un diario como EL MUNDO que es hoy el líder mundial de la información en español y el elemento nuclear de un gran grupo de comunicación como Unidad Editorial.

Somos muy conscientes de lo difícil e incómodo que a veces resulta anteponer las libertades individuales a ciertas ensoñaciones colectivas y por eso quiero darles muy sinceramente las gracias a Alex y su equipo y decirles que pueden sentirse muy orgullosos porque lo que hacen tiene un valor y un significado especial para mucha gente dentro y fuera de Cataluña.

Quiero agradecer de forma muy especial la presencia en este acto del presidente de la Generalitat José Montilla. No sólo es una prueba de la amplitud de miras con que ejerce la dimensión institucional de su cargo, sino también un gesto de buen estilo político pues de todos es sabido que pocos medios de comunicación han sido tan severamente críticos como el nuestro tanto con sus grandes opciones estratégicas de los últimos años como con múltiples aspectos de su gestión y trayectoria.

Entiendo que, por mucho que nos acerquemos a ese periodo propicio para las buenas maneras y los pelillos a la mar que siempre es una campaña electoral, su presencia hoy aquí es un recordatorio y en cierto modo un ejemplo práctico, que todos -y yo el primero- deberíamos emular, de cómo la democracia y el Estado de Derecho ofrecen más espacios de encuentro y comprensión de los que a menudo aprovechamos y de cómo hasta las más frontales discrepancias deben dejar margen para ponderar y tener en cuenta las razones del otro.

Este no es en sentido estricto un acto político y yo tendría mucho que decirles sobre la próxima edad de oro de la prensa escrita vinculada a las nuevas tabletas táctiles y demás soportes del futuro -espero que muchos de ustedes se hagan muy pronto suscriptores de Orbyt-, pero estoy seguro de que les defraudaría si en un momento como este no centrara mi intervención en la actualidad que a todos nos concierne. Máxime cuando en la memoria de muchos de los asistentes quedará algún recuerdo de lo que dije hace cinco años y de las críticas que aquellas palabras me depararon.

Les pido por favor que tengan pues en cuenta la perspectiva desde la que les hablo. Por eso he decidido leer este texto en aras de la precisión. Me siento orgulloso de gran parte de la historia de España y sobre todo del actual periodo democrático, pero yo no soy un nacionalista español.

Al menos no lo soy en el sentido de combatir un fundamentalismo con otro fundamentalismo político, histórico o cultural. Me aferro sí a la defensa de la legalidad democrática, pero también en este ámbito reconozco que los ciudadanos somos dueños de nuestro destino y que las leyes de un Estado pueden cambiarse incluso cuando afectan a aspectos tan sustanciales como la relación del conjunto con cada una de las partes o la hipotética secesión de una de ellas.

Yo no soy de los que dicen que si España no existiera habría que inventarla y nunca ocultaré mi predilección por el federalismo sobre el resto de las formas de organización política. Pero España existe, vaya que si existe, como un estado unitario desde hace cientos de años. Y además bajo su actual Constitución democrática existe para bien, pues a pesar de todas las situaciones difíciles, los momentos de turbulencia y los episodios trágicos, el balance de los últimos 33 años es en su conjunto el de una etapa de libertad y prosperidad. Si alguien tiene una fórmula mejor que la diga pero que tenga siempre en cuenta que el futuro de cualquier parte de España nos concierne a todos los españoles en términos jurídicos y que lo que fue fruto de un consenso muy cualificado sólo podrá modificarse mediante un consenso muy cualificado. Así lo establece la Constitución y así lo amparan las reglas tácitas y escritas de la Unión Europea a la que pertenecemos.

En este mismo acto de hace cinco años yo les advertí que los partidos catalanes estaban haciendo un mal negocio en todos los sentidos del término al impulsar el proyecto de Estatut que acababa de ser aprobado por el Parlament. Primero porque era imposible que consiguiera los niveles de apoyo que el texto entonces aun en vigor había obtenido en el Congreso de los Diputados toda vez que el presidente Zapatero estaba dispuesto a sacarlo adelante -quebrando una regla de oro de la transición- de espaldas al principal partido opositor, es decir de espaldas a casi la mitad de los españoles. Segundo porque lo que al final se ganara en materia de autogobierno no iba a compensar las tensiones, la crispación y el distanciamiento del resto de España que se avecinaban. Y tercero porque quedaba pendiente la cuestión de la patente inconstitucionalidad del texto, susceptible de ser corregida por los correspondientes cauces legales.

Hace cinco años era consciente de que decir todo esto no iba a granjearme demasiados aplausos y créanme que preferiría tener que reconocer hoy que me equivoqué. Pero todo ello se ha cumplido de forma inexorable y hoy nos encontramos con un sentimiento de frustración en gran parte de Cataluña; con un creciente recelo hacia la clase política catalana en el resto de España; y con la incómoda asignatura pendiente de podar el desarrollo legislativo del Estatut de todo aquello en lo que excede al fallo e interpretaciones conformes de la sentencia de un Alto Tribunal que si ha pecado de algo ha sido de sus eufemismos, camuflajes y oscuridades para intentar acomodar lo inevitable a las necesidades políticas del Gobierno. Esa asignatura pendiente, esa poda, esa sistemática revisión que exige el principio de legalidad incluye aspectos como las llamadas sanciones lingüísticas sobre las que la satisfacción de ver cambiar de opinión al PSC no puede borrar la indignación que produce su vigencia legal y su opresiva aplicación durante años. Y esa revisión tendrá que afectar también, a nuestro modo de ver, a la imposición de una lengua vehicular única en la enseñanza lo cual atañe no sólo a la legalidad constitucional sino a los principios básicos de los Derechos Humanos, tal y como acaba

de apuntar una instancia tan alejada del apasionamiento de nuestro debate como el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Ni el índice de participación en el referéndum, ni los resultados de los sondeos, ni el propio pulso de la calle desmienten mi diagnóstico de hace un lustro. Más bien lo corroboran: el nuevo Estatut ha sido, a mi modesto entender, un mal negocio para Cataluña, tanto si se le da al término su acepción más altruista como si lo vemos desde un punto de vista estrictamente crematístico.

No es agradable cumplir este papel de Casandra. Es mucho más amable pasarnos los unos a los otros el cepillo por los hombros como solía decir irónicamente el inolvidable presidente Tarradellas. Pero creo que es mi obligación advertirles con el mismo respeto y la misma franqueza con que me expresé entonces que algunos de los planteamientos que están poniéndose sobre la mesa con motivo de estas elecciones están abocados a un recorrido aun más frustrante y estéril que el del Estatut. Tampoco hoy obtendré grandes ovaciones pero al menos me quedaré con la satisfacción de haber dicho lo que pienso y de haber sido leal con una sociedad como la catalana a la que siempre me unirán lazos que ningún debate político logrará destruir.

Me refiero a los programas electorales basados en la ruptura de la unidad de España tanto de forma directa y sin ambages como mediante el subterfugio del concierto económico que haría sencillamente inviable el actual Estado democrático. Si se pretendiera reproducir en Cataluña, con un peso en el PIB prácticamente el triple que el del País Vasco, el esquema foral de la negociación de un cupo para pagar por los servicios que recibe del Estado, quedándose la Generalitat con el resto de los tributos recaudados, los conceptos de solidaridad, ordenación territorial o equilibrio interregional saltarían por los aires.

El Concierto vasco es una antigualla, una rémora, una injusta hipoteca de la Historia que debería quedar engullida por una futura armonización fiscal dentro de la Unión Europea, en ningún caso un ejemplo a imitar y menos por una comunidad del peso de Cataluña. No habrá nunca un gobierno español dispuesto a tan siquiera sentarse a negociar ese planteamiento e insistir sobre ello sólo servirá para que crezca el clamor instando a PP y PSOE a modificar la Ley Electoral para que se ponga fin a la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados.

Se trata de algo tan inviable en la práctica como la propia independencia de Cataluña, una quimera que durante siglos ha ido cristalizando en sucesivos conflictos que ante todo han supuesto graves fracturas, guerras civiles incluso, en el seno de la propia sociedad catalana. Ya sabemos como se zanjaron siempre esos intentos secesionistas. Ahora volvería a ocurrir lo mismo sólo que sin bombardeos ni tanques en las calles.

Bastaría una nota de prensa de la Unión Europea seguida de una declaración del departamento de Estado en Washington.

Ortega tenía razón. Los españoles -catalanes incluidos- nos empeñamos en ser un problema, pero Europa ya es nuestra solución. No vivimos en los Balcanes ni, como decía Mirabeau, tampoco somos salvajes llegados a orillas del Amazonas a fundar una sociedad nueva. Cualquier cambio en el statu quo de Cataluña se reproduciría de inmediato en Escocia, Gales, Bretaña, Córcega, Lapadania o Baviera, debilitando o destruyendo incluso los Estados-Nación que dentro de la Unión Europea sirven de garantes de las libertades democráticas y los derechos individuales de sus ciudadanos. Si a España le acaban de obligar a rectificar su política

económica, cuánto más no le obligarían a rectificar una política territorial que desestabilizara a los demás estados miembros. Sólo una implosión de carácter revolucionario que dinamitara los fundamentos mismos de la actual Unión Europea podría dar pie a procesos independentistas en los países desarrollados de la Europa Occidental. Y debo decirles que cuanto más estudio la Historia más de acuerdo estoy con el diagnóstico de Hanna Arendt de que la libertad ha salido mejor parada en aquellos países en los que nunca hubo una Revolución o en los que la Revolución fue derrotada que en aquellos en las que impuso sus nuevos dogmas por la fuerza..

No pretendo tener el monopolio de la verdad ni el don de la adivinación. El 10 de octubre de 2005 les emplacé para examinar al cabo de diez años qué razones nos había dado y quitado a cada uno el tiempo. Ya hemos recorrido la mitad de ese trayecto y como he explicado hay más motivos para la preocupación que para el optimismo. Ojala en Octubre de 2015, cuando EL MUNDO de Catalunya cumpla veinte años, la tendencia sea a la inversa. En todo caso les prometo que nosotros seguiremos "escuchando las voces del viento por el alto mar de espigas" y "nos mantendremos por siempre fieles al servicio de este pueblo". Es decir al servicio de la "difícil y merecida libertad" de las personas que lo componen.